

«RIT»

Foja: 1

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 10º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-27366-2019
CARATULADO : CONTRERAS/FISCO DE CHILE - CONSEJO
DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, veinte de Septiembre de dos mil veintidós

VISTOS.

Que a folio N° 1 de estos antecedentes, de fecha 5 de septiembre de 2019, comparece don Boris Paredes Bustos, abogado, domiciliado en Pasaje Doctor Sótero del Río N° 326, oficina 707, comuna de Santiago, en representación de don **Julio César Contreras Leiva**, pensionado, domiciliado en Los Quillayes N° 351, Población La Aguada, Illapel, y de don **Fernando Enrique Contreras Leiva**, pensionado, domiciliado en Sector Barroco, parcela N° 67, Llimpo, Salamanca, quien interpone demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios en contra del **Fisco de Chile**, representado por el Consejo de Defensa del Estado por doña María Eugenia Manaud Tapia, abogada ambos domiciliados en Agustinas N° 1687, de la comuna de Santiago, por los antecedentes que pasa a exponer.

Hace hincapié en que los hechos que relatara han sido reconocidos de forma voluntaria por el Estado de Chile a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

En relación a don Julio Cesar Contreras Leiva, señala que su registro en la Comisión de Prisión y Tortura es el N° 6.209, y que nació el 24 de noviembre de 1950, teniendo actualmente 68 años de edad. Refiere que en la época del golpe militar su representado era dirigente del Partido Socialista, mudándose los días posteriores, al refugio de su hermano ubicado en la localidad de Chuchiñi, con el fin de buscar seguridad para su familia.

Indica que con fecha 5 de octubre de 1973, una patrulla de Carabineros, portando fusiles con los que disparaban hacia los cerros y los que estaban a cargo del capitán Gabriel Muñoz, llegó al lugar en que se encontraba. Dicho capitán golpeó a su hermano con la culata del fusil, mientras los otros uniformados entraban en la casa dando golpes de pie a un amigo de su hermano, don Jorge Villalón, siendo los tres detenidos y llevados al pantano de la quebrada de Quilmenco, lugar en que la camioneta que trasladaba a los prisioneros se encontraba atascada en el barro, por lo que Carabineros a punta de armas los rodeó obligándolos a empujarla para sacarla de allí.

Luego son transportados a la Comisaría de Salamanca, siendo encerrados en un calabozo ocupado por otros detenidos, los que fueron trasladados durante la noche a la cárcel de Illapel, permaneciendo allí solo los tres. Añade que Jorge Villalón fue brutalmente torturado en aquel lugar varias veces.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

Agrega que a cada hora los uniformados ingresaban al calabozo, y les ordenaban trotar en el patio de la comisaría, mientras disparaban al aire y les gritaban improperios, además de torturarlos con golpes en todo su cuerpo. Precisa que en aquel lugar estuvo junto a su hermano detenido hasta el 10 de octubre, quedando en libertad desde ese día pero con graves secuelas psicológica por lo vivido.

Señala que respecto de don Fernando Enrique Contreras Leiva, quien mantiene registro N° 6.207 en la Comisión de Prisión Política y Tortura, nacido el 21 de marzo de 1937, con 82 años de edad en la actualidad, durante el periodo que ocurrieron los hechos era simpatizante del Partido Socialista, siendo detenido el 5 de octubre de 1973 en su refugio de ganado en el sector de Quilmenco-Chichiñi, por una patrulla de Carabineros de la comisaria de Salamanca, la que estaba a cargo del capitán Gabriel Muñoz.

Expone que los agentes del estado llegaron disparando sus fusiles hacia los matorrales al refugio donde se encontraba junto su hermano y un amigo, este último dormía dentro de la casa, lugar en que ingresaron los uniformados, despertándolo con insultos y golpes de pie. Añade que una vez que los tres fueron conducidos al campo, el capitán los interrogó, dándole un fuerte golpe en el estómago a su representado con la culata del fusil.

Enseguida indica, que los trasladaron detenidos a la Comisaría de Salamanca, sin embargo al llegar al vehículo mediante el cual los llevarían este estaba atorado en un pantano, por lo que fueron obligados a empujarlo para sacarlos de allí, mientras eran apuntados con armas.

Indica que una vez que arribaron a la Comisaria, fueron encerrados en un calabozo junto a otros prisioneros políticos, estando 5 días detenidos, tiempo en que sintió una profunda impotencia, puesto que su ganado y todas sus pertenencias habían quedado tiradas sin cuidado alguno, lo que le significó una enorme pérdida económica, siendo además víctima de torturas consistente en golpes de pies y puños. Añade que en la madrugada eran llevados al frontis de la Comisaría a trotar, mientras eran rodeados por Carabineros armados, los que disparaban al aire, además de insultarlos. Asimismo durante su estadía en aquel lugar fue testigo de las múltiples vejaciones sufridas tanto por su amigo Jorge Villalón como por Óscar Aeda, otro detenido.

Agrega que fue dejado en libertad luego de 5 días de estar detenido, junto a su hermano sin cargos, pero quedando con graves secuelas psicológicas derivadas de la experiencia vivida. Hace presente que Jorge Villalón y Oscar Aedo quedaron detenidos y que pese a que no se formularon cargos en contra de ellos, de igual



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

forma tuvieron que declarar ante la fiscalía militar los primeros días de noviembre del año 1973.

Sostiene que de los hechos invocados se desprende que sus representados, de forma inequívoca, y a consecuencia de las torturas sufridas, han experimentado un perjuicio de índole síquica y física inmenso producido por el Estado de Chile durante el gobierno militar. Dichos daños son permanentes, atendido que independiente de haber trascurrido más de cuarenta años desde que ocurrieron, las personas mantienen las secuelas causadas a consecuencia de la privación de libertad y las torturas a las que fueron sometidas, además que muchos de ellos directa o indirectamente tuvieron que abandonar al país sin poder retornar, alejándose de sus familias.

Cita lo expresado por la Comisión de Prisión Política y Tortura, abundado en que los daños emocionales, morales y materiales causados a las víctimas son lo que se solicitan en esta acción. Añade que los daños físicos y síquicos se visualizan de forma diferente dependiendo de la persona que los experimento pero que todos tienen en común el daño moral. Menciona jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema pronunciándose sobre el daño moral.

Manifiesta que en razón a lo reseñado precedentemente y en representación de los demandantes, solicita que por concepto de daño moral ocasionado por el secuestro y la tortura, el pago de \$200.000.000 para cada uno de ellos, los que deben ser pagados con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales desde la fecha de la notificación de la demanda y hasta su completo pago, más las costas, o el monto que el Tribunal determine de conformidad a su valorización.

Explica que el Estado de Chile ha reconocido de manera expresa su responsabilidad en los secuestros y torturas ocurridas durante la dictadura militar, a través de diversos actos e instrumentos jurídicos, entre los que destacan el Informe emitido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y el Informe sobre Prisión Política y Tortura, llamado Informe Valech. En este último sus representados fueron reconocidos como víctimas de prisión y tortura. Añade que la responsabilidad del Estado deriva del principio general del derecho administrativo mediante el cual se le obliga a responder por los perjuicios ocasionados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas, el que además se ha desarrollado sobre la base de la jurisprudencia y de la legislación especial, la que además es anterior a los hechos juzgados en este caso. Cita la Constitución de 1925 y 1980 para efectos de fundar la responsabilidad del Estado en dichos acontecimientos, y la obligación que recaer sobre esta institución de indemnizar.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

Arguye en que la presente acción es imprescriptible, atendido que la responsabilidad del Estado es un problema de derecho público, por lo que deben aplicarse esas normas y no las contenidas en el Código Civil, exponiendo lo dicho en relación a esto por el profesor Eduardo Soto Kloss. Refiere que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia también ha resuelto en el mismo sentido, citando un fallo que recoge la inaplicabilidad de las normas contenidas en el Código Civil.

Señala que las normas constitucionales que consagran la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados en cualquiera de sus actividades, tiene una vinculación directa, sin que sea necesaria la dictación de una norma de rango inferior que disponga su aplicación. Asimismo refiere que la responsabilidad extracontractual del Estado también se encuentra contenida en la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, cuando establece la falta de servicio por parte de ese organismo.

Describe los requisitos que deben cumplirse para indemnizar, señalando que en este caso se cumplen cada uno de ellos, ya que en cuanto al daño moral, este se presume por el solo hecho de haberse cometido un delito, y que dicha acción se originó en un órgano del Estado a través de sus agentes los que torturaron a sus representados. En cuanto al nexo causal, es el daño provocado a las víctimas, el que emana de la comisión del delito civil, no existiendo causales de justificación que lo eximan de su responsabilidad.

Abunda en los fundamentos del derecho internacional mediante los cuales se obliga al Estado a indemnizar, toda vez que los hechos que originaron la responsabilidad que se demanda, tienen además el carácter de violaciones a los derechos humanos, por lo que esta responsabilidad también debe determinarse de conformidad a los convenios o tratados internacionales, las que no deben incumplirse bajo el pretexto de que priman las normas de derecho interno. Señala que estas normas además tienen un carácter consuetudinario, las cuales han sido reconocidas por los Estados. Nombra la Convención de Viena la cual refiere sobre esta materia.

Hace presente que la responsabilidad que cabe al Estado es integral, y por tanto debe repararse todo daño que se cause a un particular, dentro del cual queda comprendido el daño moral. Para reafirmar lo anterior, alude a jurisprudencia de los Tribunales y de la Corte Interamericana.

Finaliza indicando que el Estado de Chile debe responder por el perjuicio provocado por el Ejército de Chile en esa calidad, toda vez que se cumple con los presupuestos necesarios para establecer el perjuicio moral que sufrieron sus representados.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

Previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del Fisco de Chile, representado por doña María Eugenia Manaud Tapia, ambos ya individualizados, sometiénola a tramitación y en definitiva que se acoja en todas sus partes, declarándose el pago de \$200.000.000 a cada uno de los demandantes, más los reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo, o el monto que el Tribunal estime, ajustado al mérito de los antecedentes, con costas.

En el folio N° 10, comparece doña Ruth Israel López, Abogada Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, quien viene en contestar la demanda civil interpuesta, solicitando su rechazo en atención a las excepciones y defensas que pasa a exponer.

Realiza un breve resumen de los hechos incoados por los actores en el libelo, además de mencionar los fundamentos jurídicos de los mismos, para luego contestar la demanda ejerciendo las defensas y alegaciones, y además oponiendo excepciones.

En primer lugar, opone la excepción de reparación integral, toda vez que los demandantes ya fueron indemnizados. Señala que el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por transgresión a los derechos humanos debe comprenderse desde el punto de vista jurídico nacional e internacional, con la llamada Justicia Transicional. Añade que uno de los pilares en los cuales descansa esta justicia es en el dilema denominado justicia versus paz, y que tiene como fundamento la necesidad de un país tranquilo que mira sus errores del pasado y con ello pronunciarse sobre el nunca más. Indica que a su vez no debe olvidarse desde la perspectiva de las víctimas la reparación de los daños sufridos, el que juega un rol importante en el reconocimiento de la medida de la justicia buscada por tantos años.

Refiere que las negociaciones entre el estado y las víctimas demuestran que toda reparación es una decisión compleja de destinar recursos económicos públicos que satisfagan ciertos tipos de necesidades públicas a otras radicada en grupo de personas más específicos. Dichos intereses se muestran normalmente en la diversidad de contenidos que se proponen como programa de reparación en las Comisiones de Verdad o Reconciliación. Estos programas incorporan beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otros análogos diversos que se remiten a la entrega de una cantidad determinada de dinero y que atendida la complejidad de estas negociaciones, muchas veces se privilegia a algunos



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

grupos por sobre otros o se compensan ciertos daños y se dejen de lado otros o simplemente estos se fijan por vía legal, luego de un acuerdo público.

Sostiene que durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, en relación a la justicia transicional, se arribó a tres objetivos principales los cuales eran a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura; b) la provisión de reparaciones para los afectados; y c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse.

Indica que respecto al segundo objetivo, la Comisión de Verdad y Reconciliación, llamada Comisión Rettig, en su informe final, planteó una serie de propuestas de reparación, dentro de las cuales estaba la “pensión única de reparación para los familiares directo de las víctimas”, y algunas prestaciones de salud. Señala que dicho informe originó la dictación de la Ley N° 19.123 mediante la cual se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, siendo el mensaje principal del proyecto de esa ley, el buscar la reparación precisamente del daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas.

Precisa que la idea reparatoria se plasmó de forma clara en la ley mencionada, estableciéndose distintos mecanismos a través de los cuales se ha concretado esta compensación, y que esta se ha materializado mediante tres formas; a) reparaciones a través de transferencias directas de dinero, b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, y c) reparaciones simbólicas. Agrega que a través de aquellas se ha cumplido con el objetivo del proceso de justicia transicional, el que busca precisamente la reparación moral y patrimonial de las víctimas.

En relación a lo anterior, refiere que se ha establecido la reparación mediante transferencias directas de dinero, en las que además se incluyó a las personas víctimas de apremios ilegítimos, destacando que la legislación dispuesta al efecto enfrentó dos posiciones que tenían que ver con la entrega de una suma de dinero o bien con una pensión vitalicia, y que en ambos casos los fines eran innegablemente resarcitorios, estimando que a diciembre del año 2015 el Fisco habría desembolsado por este concepto la suma total de \$706.387.596.727. Señala que respecto a la pensión mensual, también es una forma de reparar el perjuicio y el cálculo para efectos indemnizatorios se efectúa sumando las cantidades que ya se han pagado bajo ese criterio, adicionando las mensualidades que se deben pagar en el futuro, y con ello es posible apreciar el alto impacto que estas han tenido.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

Manifiesta que en cuanto a las reparaciones específicas establecidas en la Ley N° 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos, los demandantes han recibido beneficios pecuniarios bajo dicha ley, toda vez que en ella se estableció una pensión anual de reparación, además de otorgar otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos en el anexo listado de prisioneros políticos y torturados de la nómina en la cual se les ha reconocido como víctimas. Señala que se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años, de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 años o más y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años.

Asimismo indica que la actora recibió recientemente el Aporte Único de Reparación de la Ley N° 20.874 por el monto de \$1.000.000.

Expresa sobre las reparaciones que se han hecho de acuerdo a la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, en el sentido que a los beneficiarios de la Ley N° 19.234, y de la Ley N° 19.992 se les concedió el derecho a la gratuidad en las prestaciones médicas, dadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en los Servicios de Salud del país, el que se accede concurriendo al hospital o consultorio de salud correspondiente al domicilio del beneficiario, e inscribiéndose en la oficina del PRAIS pertinente.

Añade que además del acceso gratuito a este tipo de prestaciones, el PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario, que atienden de forma exclusiva a los beneficiarios del programa. Asimismo adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios de FONASA, además del derecho a organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de autoridad sanitaria crea, así como también obtienen el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIA en la difusión del programa y la promoción del resto de los Derechos Humanos, ofreciéndoles apoyo técnico y rehabilitación física. Refiere que de igual forma se incorporaron beneficios educacionales, consistentes en la continuación de los estudios básicos, medios y superiores de manera gratuita, el que además se traspasa a sus hijos o nieto en caso de no utilizarse. Por último también se les ha entregado beneficios en vivienda a través de subsidios.

Aduce que parte de estos procesos de justicia transicional también es importante la reparación del daño moral ocasionado a las víctimas de trasgresión a los derechos humanos, lo que se realiza por medio de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

trasgresiones. En este sentido, destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica, como la construcción de Memorial del Cementerio General en Santiago del año 1993, la fijación del día Nacional del Detenido Desaparecido, mediante el Decreto N° 121, que recae en el 30 de agosto de cada año, la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, establecimiento por Ley N° 20.405 del Premio Nacional de los Derechos Humanos, y además de la construcción de distintos memoriales y obras a lo largo del país, así como también de obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, etc.

Hace presente que hasta hoy el Estado ha hecho importantes esfuerzos con el fin de reparar a las víctimas de Derechos Humanos, cumpliendo con estándares internacionales de Justicia Transicional y entregando indemnizaciones acordes con la realidad económica del país, las que han compensado a dichas víctimas por los daños morales y patrimoniales sufridos a consecuencia de las violaciones a los Derechos Humanos. Por lo anterior indica, que la indemnización solicitada en la demanda como el conjunto de reparaciones ya mencionadas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por idénticos hechos, por lo que no procede que sean reparados nuevamente. Cita jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema que ha fallado bajo ese criterio. En el mismo sentido refiere que diversas sentencia han resuelto, que el propósito de las leyes dictadas respecto de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, era reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de estas, lo que es congruente con las resoluciones emanadas de Tribunales Internacionales respecto a la improcedencia de la indemnización

Sostiene que de acuerdo a lo anterior los órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado de forma positiva la política de reparación de violaciones de los Derechos Humanos implementada en el país, a tal extremo que ha rechazado otra forma de reparación pecuaria, luego de tomar en consideración los montos ya entregados por el Estados por concepto de pensiones, beneficios y prestaciones públicas. Asimismo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha estimado que es beneficioso establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas con la finalidad de no provocar desigualdades. Por los motivos esgrimidos opone la excepción de reparación satisfactiva toda vez que la demandante ya ha sido indemnizada.

Opone además la excepción de prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios de conformidad al artículo 2332 en relación al artículo 2497, ambos del Código Civil, toda vez que la demandante en su presentación



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

señala que la detención ilegal, y tortura sufrida ocurrieron durante la dictadura militar a partir del 5 de octubre de 1973. A su vez y entendiendo que la prescripción se encontraba suspendida hasta la vuelta de la democracia, también la acción se encontraría prescrita por haber transcurrido en exceso el plazo contenido en la ley.

A consecuencia de lo señalado, opone dicha excepción correspondiente a 4 años prevista en el artículo 2332 del Código de Bello, solicitando acogerla y de este modo se rechace íntegramente la demanda intentada. En subsidio de lo anterior, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años, prevista en el artículo 2515 en relación al artículo 2514 del Código ya mencionado, toda vez que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la data de la notificación del presente libelo, ha transcurrido con creces el plazo dispuesto en la norma legal ya citada.

Explica las generalidades de la prescripción, señalando que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre de un texto constitucional o legal expreso que así lo prevenga, lo que en este caso no existe. Asimismo indica que la prescripción es una institución universal y de orden público. Añade que en el Código Civil, en el Título XLII del Libro IV, se encuentran contenidas las normas que regulan dicha institución y en específico, en su artículo 2497 establece las normas de la prescripción en favor y en contra del Estado.

Colige que la prescripción no exime de responsabilidad ni elimina el derecho a indemnizar, sino que solamente ordena y pone un límite necesario en el tiempo para que se deduzcan en juicio las acciones pertinentes, existiendo una armonía en las leyes que se rigen esta materia y que en este caso los demandantes tuvieron muchos años para ejercer dicha acción.

Transcribe el extracto de una sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema la que ha declarado que las acciones civiles en estos casos se rigen por las normas del derecho común, toda vez que los tratados internacionales establecen la imprescriptibilidad respecto de las acciones penales, y no de las acciones civiles.

Sostiene que la acción indemnizatoria no tiene un carácter sancionatorio, si no que su contenido es netamente patrimonial, y la cual persigue la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que debe aplicarse las normas de prescripción contenidas en el Código Civil. Agrega que, aun cuando los demandantes fundan la imprescriptibilidad de las acciones en Tratados Internacionales, lo cierto que en ellos tampoco se contempla esa institución en relación a las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

o bien que prohíban o impidan la aplicación del derecho interno en esa materia. Describe la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, Los Convenios de Ginebra, La resolución N° 3.074 de fecha 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, La Convención Americana de Derechos Humanos, indicando que en ninguna de ella se establece la imprescriptibilidad de las acciones civiles. Por lo latamente expuesto, solicita que se rechace la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

Manifiesta que en relación al daño e indemnización pedida, es difícil avaluar y apreciar de forma pecuniaria los daños no patrimoniales sufridos, toda vez que su contenido no es de índole económica, o al menos no directamente, atendido que la indemnización de perjuicio tiene como finalidad restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, entregando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, y con ello quede en el mismo estado previo al acto que le produjo daño.

Por este motivo la indemnización del daño moral no se determina ponderando el valor de la pérdida o la lesión experimentada, sino solo otorgándosele a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita minimizar este daño o hacerlo más soportable, a través de una cantidad u otro medio. Indica que no existe una norma legal que regule lo anterior, por lo que se debe estar a los principios generales y básicos de la cuantificación correspondiente a la extensión del daño, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado. Señala que en este sentido la cifra solicitada por los actores es excesiva, teniendo en cuenta las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia y los montos promedios que han fijados los Tribunales de Justicia, los que han sido fijados con mucha prudencia. Cita jurisprudencia de Ilustrísima Corte de Apelaciones y Excelentísima Corte Suprema que ha resuelto bajo ese argumento.

Señala que en subsidio de anterior, su parte alega que respecto a la fijación del daño moral por los hechos relatados, en ellos se deben considerar todos los pagos recibidos durante todos estos años por los demandantes de parte del Estado, conforme a las leyes ya mencionadas, las que además seguirán percibiendo a título de pensión, así como también los beneficios extramatrimoniales, cuyo objetivo también es la reparación del daño moral. Añade que el no accederse a esta petición, involucraría un doble pago por el mismo hecho, lo que es contrario a los principios jurídicos básicos del derecho. Asimismo



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

señala que debe tomarse en cuenta los montos establecidos en las sentencias dictadas por los Tribunales en esa materia.

Finaliza haciendo presente sobre la improcedencia del pago de reajustes e intereses, ya que los reajustes solo proceden una vez que se haya dictado la sentencia que acoja la demanda y ordene dicha obligación y que además la misma se encuentre firme y ejecutoriada, por esta razón, no existiendo sentencia dictada en autos, su representado no tiene ninguna obligación de indemnizar y por tanto no existe suma alguna que reajustar, y además estos solo deben ser contabilizados una vez que se dicta la sentencia que los concede. Refiere que en atención a los intereses, el artículo 1551 del Código Civil insta de manera expresa que el deudor no se encuentra en mora mientras no haya sido reconvenido y haya retardado el cumplimiento de la sentencia.

Que a folio N° 14, comparece don Luis Pérez Camousseight, abogado en representación de los demandantes, quien encontrándose dentro de plazo legal evacua la réplica reiterando íntegramente lo expuesto en la demanda, y agregando además otras argumentaciones.

Sostiene que en relación a la excepción de reparación integral alegada por la demandada, la misma esgrime una serie de leyes que han establecido pensiones para reparar el daño causado a las víctimas, las que de modo alguno impiden que se indemnice con un monto fijado por un Tribunal de la República. Dicha excepción de pago, es irreconocible bajo la normativa internacional, toda vez que el derecho común interno solo se aplica cuando no refuta al derecho internacional en materia de violación a los derechos humanos.

Añade que lo alegado por el Fisco, solo consagra un régimen de pensiones asistenciales, las que no son incompatibles con la indemnización solicitada en este juicio, atendida que dichas reparaciones no compensan de forma íntegra todo el daño que se les provocó a las víctimas. Indica que tampoco existe legislación que disponga la incompatibilidad de estas indemnizaciones, ni que la aceptación de dichos beneficios haga suponer una renuncia a las acciones judiciales correspondiente, y asimismo lo ha establecido la jurisprudencia.

Revela que en relación a la excepción de prescripción la jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema ha sido enfática en resolver que tratándose de delitos de lesa humanidad cuya acción penal es imprescriptible, también lo es la acción civil indemnizatoria, ya que lo contrario importaría una trasgresión a la normativa internacional sobre derechos humanos, la que es integrante del ordenamiento jurídico interno de conformidad al inciso segundo de artículo 5 de la Constitución. Por lo anterior concluye, que realizar una



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

diferenciación en orden a dividir ambas acciones y con ello entregarles un tratamiento distinto resulta improcedente, y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que requiere, asimismo, aplicar las disposiciones del Código Civil a la responsabilidad ocasionada por crímenes de lesa humanidad, no resulta procedente en la actualidad.

Manifiesta que todo lo reseñado tiene su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional sobre Derechos Humanos y su consagración en los Tratados Internacionales ratificados por Chile, los que obligan al Estado a reconocer y proteger estos derechos. Cita la Convención Interamericana de Derechos Humanos a reafirmar lo señalado.

Abunda que además del evidente daño moral, en este caso estamos frente a una violación a los derechos esenciales de los demandantes por los agentes del estado, lo que hace surgir la obligación de esta institución para repararlos.

Con respecto al monto solicitado de indemnización indica que este se ajusta a derecho, ya que se trata de un daño moral de gran magnitud, toda vez que se afectó la salud mental de sus representados y que por lo demás el Tribunal lo establecerá en su oportunidad.

En relación a los reajustes e intereses, también refiere que estos están conforme a derecho, ya que un tribunal fija los montos en un momento determinado, pensando en el valor adquisitivo a esa fecha, motivo por el cual se debe considerar su desvalorización.

En el folio 16, evacuando el trámite de la dúplica, ratifica todas las argumentaciones expuestas en la contestación, las que da por reproducidas, solicitando el rechazo de la acción deducida.

Reitera que en lo tocante a la excepción de reparación satisfactiva respecto al daño moral, este ya ha sido indemnizado, por lo que es procedente lo alegado atendido que el Estado de Chile ha empleado un enorme esfuerzo para reparar el daño producido a las víctimas, ya sea a través de transferencias de dineros, reparaciones simbólicas, etc.

Respecto de la prescripción de la acción deducida, insiste en la importancia de la sentencia que unificó la jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, la que se transcribo en sus principales argumentos en el escrito de contestación, y la que concluye que las acciones de responsabilidad extracontractual del Estado prescribe en 4 años contados de la ocurrencia de los hechos, según lo previsto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación al artículo 2497 del mismo cuerpo legal ya citado, agregando que la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

misma ha estimado que los tratados internacionales de derechos humanos no impiden la aplicación del derecho interno, y en específico a lo expresado sobre la prescripción de la acción civil. Alude a jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema que ha resultado bajo ese argumento.

En el folio N° 17, de fecha 9 de enero de 2020, se recibió la causa a prueba, fijándose los puntos substanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales iba a recaer.

Finalmente, en el folio N° 44, de fecha 2 de diciembre de 2021, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a folio N° 1, comparece don Boris Paredes Bustos, abogado, en representación de don Julio César Contreras Leiva, y de don Fernando Enrique Contreras Leiva, quien deduce demanda en juicio ordinario de responsabilidad extracontractual con indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, todos ya individualizados, solicitando tenerla por interpuesta, acogiéndola a tramitación y en definitiva que se le condene al pago de \$200.000.000, para cada uno de los demandantes, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta su pago efectivo y total de estas, o la suma que el Tribunal determine, con costas.

Funda su demanda, en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueron expuestos en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan expresamente por reproducidos para todos los efectos legales.

SEGUNDO: Que a folio N° 10, comparece doña Ruth Israel López, en representación del Fisco de Chile, quien estando dentro de plazo legal contesta la demanda civil interpuesta, solicitando su rechazo en atención a las excepciones y defensas refrendadas en la parte expositiva precedente.

TERCERO: Que, tal como consta en el folio N° 17, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales iba a versar, los siguientes:

- 1.- Existencia de los perjuicios reclamados por la demandante. Monto y naturaleza.
- 2.- Relación de causalidad entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño producido.
- 3.- Efectividad que los demandantes han obtenido reparación satisfactiva en relación a los hechos demandados.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

4.- Efectividad de que la obligación se encontraría prescrita. Hechos y circunstancias.

5.- En lo afirmativo de lo anterior, si habría operado la suspensión de la prescripción en el caso de marras.

CUARTO: La parte demandante ofreció y rindió los siguientes medios de prueba:

1-En el folio 38, certificado de salud de don Julio Contreras Leiva evacuado por el PRAIS de Coquimbo, siéndole realizada la evaluación el día 26 de Enero de 2021.

En este documento, consta que el actor alude a su situación general, quien tiene además 4 hermanos; vivía con su madre. Era militante del Partido Socialista.

Contrajo matrimonio con Eva Lanas Manque, con quien tuvo 3 hijos nacidos en 1975, 1977 y 1990.

Dice que su primer trabajo formal fue como inspector de liceo y en 1977, comienza a trabajar en el Hospital de Illapel en la oficina de personal, quedando a cargo de ella en 1978. Jubiló en 2017.

Respecto a sus antecedentes de salud, padece de dislipidemia; registra dos operaciones; consume atorvastratina.

Narra su situación posterior el 11 de septiembre de 1973, quien tuvo que esconderse de los allanamientos a la sede del Partido Socialista al que pertenecía, llegando a vivir con su hermano Fernando en Quilmenco, donde fue detenido y golpeado de un culatazo en el estómago; fue sometido a un “simulacro de fusilamiento”. Detalla que sufrió humillaciones e insultos, trabajos forzados y amenazas.

Indica que, estando detenido, “los hacen trotar desde las 3 am, privándolos de dormir, mientras son insultados y percutan disparos a modo de amenaza”, junto con presenciar otros tratos vejatorios hacia otros detenidos.

Dice que el documento que experimenta las siguientes torturas: privación del sueño mientras es forzado a realizar trabajos extenuantes; confinamiento en condiciones inhumanas (encerrados en calabozos inundados, sin iluminación, insultos; amenazas de muerte o mutilación, simulacro de fusilamiento, entre otros.

Detalla que si bien no posee síntomas psicóticos y juicio de realidad conservado, su afectividad es concordante con el discurso, contactándose con el relato y experimentando “flashbacks” que vivencian miedo y angustia. Ha experimentado irritabilidad, insomnio, pesadillas, evitación y síntomas; ánimos depresivos.

En los primeros años evidenció una desazón y desesperanza pero logró con sus recursos personales tener una posición más optimista de la vida.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

En su dimensión social, manifiesta sensación subjetiva de carencia como proveedor y como esposo, afectando a su familia, en las posibilidades de desarrollo de una carrera para su esposa(sic). Por muchos años, pierde su interés de participar de actividades sociales y se torna desconfiado.

Concluye que, a su respecto, existe un impacto negativo e irreparable en su historia vital producto de lo acontecido durante la detención. Existen daños en el proyecto de vida, educacional, y económico, percepción de carencia, producto de estrés postraumático crónico. Manifiesta capacidad de resiliencia, logrando reconstruir su vida y mantener a su familia pese a las innegables secuelas psicológicas que experimenta hasta la actualidad.

El documento contiene firma ilegible de Beatriz Duk Valenzuela, psiquiatra.

2-En el folio 38, certificado de salud de don Fernando Contreras Leiva evacuado por el PRAIS de Coquimbo, siéndole realizada la evaluación el día 17 de Noviembre de 2020.

En el documento aparece que el actor tiene 85 años a la fecha del informe, siendo el segundo de cinco hermanos, criancero desde su infancia hacia el interior de salamanca, emigrando a los 13 años a Santiago. Vivía al interior de Illapel, en la localidad de Quilmenco, sin participar en actividades políticas.

En cuanto a su salud, padece de hipertensión arterial sin tratamiento; dos intervenciones quirúrgicas.

Precisa que al ser detenido, se le acusó de ayudar a escapar a personas a Argentina por el límite que el actor conocía a cabalidad por su actividad laboral; dice que se le detuvo aplicándole golpes de culatas, siendo amenazado de muerte, presión psicológica; presencié fusilamientos; golpes, posición forzada con las manos en alto durante horas; insultos y agresiones verbales.

Refiere que, una vez liberado, fue objeto de persecuciones. No tuvo pareja estable ni formó familia.

Respecto a su evaluación médica, consta que sufre alteraciones de memoria en el sentido de indicar fechas relevantes, aunque de acuerdo al pensamiento éste se presenta afectado de manera estructural, a través de pensamiento tangencial dando la impresión que evita consciente inconscientemente tocar diversos temas de su vida relacionados preferentemente con las emociones y afectos.

Frente a las vivencias, señala la afección sufrida por su madre, generando rechazo significativo al personal de las fuerzas armadas, evadiendo ir a Salamanca o a centros urbanos. Acusa detrimento económico y laboral, al perder gran parte de sus animales causando detrimento económico y laboral.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

Concluye un impacto irreparable en su historia vital, causando deterioro en su vida, sin poder concretar relaciones de pareja; pérdida de fuente laboral y aislamiento, junto con el rechazo por relacionarse por la sociedad civil y carabineros.

Consta firma de Alfredo Araya Uribe, médico general, y Andrea Vega, psicóloga/coordinadora.

3-En el folio 36, artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad e incorporados en los autos rol C-22.561-2018, del 28° Juzgado Civil de Santiago, seguidos por la misma materia, que refleja las secuelas a la salud mental de quienes se vieron expuestos a actos vejatorios cometidos por agentes del Estado.

4- En el folio 36, artículo titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico” del mes de julio del año 1978, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad, relacionada con la misma situación antes señalada.

5- En el folio 36, artículo titulado “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de julio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad. El documento describe la situación de aplicación de tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980, junto con la descripción de las relegaciones y amedrentamiento aplicadas, sumado al daño causado en los familiares, sea de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, fenómeno que, además, iría vinculado a la extrema pobreza.

6- En el folio 36, artículo titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de Abril del año 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad.

El documento contiene algunos elementos de los efectos y respuestas que han ido desarrollando los afectados directos por actos de represión, dividiendo en tres etapas la fase en estudio, que comprende los años 1973 y 1980, y la forma en que el trabajo social acudió en ayuda de quienes se vieron involucrados en estos hechos.

7- En el folio 36, artículo titulado “Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos” del mes de junio del año 1989, suscrito por el Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo Hernández, Ps. Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares y Aux. Enf. Janet



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

Ulloa, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad.-, descrito en el contexto político vigente en Chile desde 1973 hasta la fecha de dicho documento, 1989.

8-En el folio 37, Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech 1, documento de 638 páginas.

9.- En el folio 37, Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech 1, en la que mi representado don Julio César Contreras Leiva figura bajo el número 6.209 y don Fernando Enrique Contreras Leiva figura bajo el número 6.207 (páginas 161 y 162, respectivamente)

10- En el folio 37, Certificado Psicológico y Social evacuado por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, de fecha 04 de Septiembre de 2020.

En este antecedente, consta lo siguiente:

a) Respecto de JULIO CESAR CONTRERAS LEIVA, pensionado, 69 años de edad, a la fecha del golpe militar era dirigente del Partido Socialista, por lo que días después se muda a la majada de su hermano en la localidad de Chichiñi, buscando seguridad para su familia.

b)En relación con FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS LEIVA, de 82 años de edad a la fecha del informe, era simpatizante del Partido Socialista.

Precisa que fueron detenidos el 5 de octubre de 1973, en su majada de ganado en el sector de Quilmenco-Chichiñi, por una patrulla de carabineros de la comisaría de Salamanca junto a su hermano.

La patrulla estaba a cargo del capitán Gabriel Muñoz, quienes portaban fusiles y disparaban hacia los cerros, siendo golpeado un amigo de los actores. Julio recibió golpe en el estómago.

Respecto de Fernando, explica la aflicción por la pérdida de su ganado y las torturas sufridas como golpes de pies y puños, permaneciendo detenido con su hermano hasta el 10 de octubre de 1973.

Refiere efectos de estrés post- traumático y depresión, siendo una *“historia dolorosa, traumática y que muchas veces no encuentran palabras para expresar el sufrimiento, la indefensión, la soledad, el desamparo y el componente social provocado por las torturas crueles e inhumanas”* dada la persecución sufrida.

Detalla más adelante que la tortura se puede entender como una práctica científicamente planificada para desmontar los mecanismos de la identificación primaria, que se propone llevar al torturado a la destrucción de su yo y de su



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

mundo simbólico. Se aplica sobre el cuerpo, con la finalidad de anular los ideales, expectativas y voluntad de la víctima, sometiéndolo en cuanto a sus intereses.

Refiere el contexto en que se promovieron dichos tratos vejatorios, siendo la impunidad, ausencia de verdad y justicia lo que afecta de manera psicotraumática. Esto ha ocasionado periodos cíclicos de estos trastornos en estas personas; ciclos de angustia.

Concluye que tanto JULIO CESAR CONTRERAS LEIVA y FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS LEIVA sufren de un síndrome de estrés post-traumático crónico. Además, sufrieron de torturas extremas por muchos meses pasando de un recinto de detención a otro llevando las torturas al extremo de la resistencia. Las sitúa dentro del contexto del daño causado a parte de la población, causando daño emocional, moral y material, lo que amerita un proceso de reparación integral.

Contiene la firma de Fresia Vargas Neira, psicóloga clínica, y José Guzmán Rojas, director ejecutivo de CINTRAS.

QUINTO: La demandada, por su parte, solicitó, en el folio 10, oficio al Instituto de Previsión Social, el que fuere evacuado en el folio 18, de fecha 6 de enero de 2020.

En dicho antecedente, constan los antecedentes de beneficios de reparación recibidos por ambas personas:

i)En relación con Fernando Contreras Leiva, consta que ha recibido \$28.905.541.- por concepto de Pensión de Ley N°19.992; \$1.000.000.- por concepto de bono Ley N° 20.874; \$475.162.- por concepto de aguinaldos; totalizando a la fecha la suma de \$30.380.703.- La pensión actual que recibe asciende a \$216.944.-

ii)Respecto a Julio César Contreras Leiva, consta que ha recibido la suma de \$26.000.088.-; por concepto de pensión Ley N°19.992; \$1.000.000.- por concepto bono Ley N°20.874; \$475.162 por concepto de aguinaldos, totalizando a la fecha la suma de \$27.475.250.- La pensión actual que recibe asciende a \$189.552.-

I-En cuanto a la excepción de reparación integral

SEXTO: En primer término, corresponde resolver la alegación opuesta por la demandada, y que dice relación con la reparación integral de los actores destinadas a enervar la acción indemnizatoria por daño moral pretendida, fundada en los beneficios de los que ha recibido el actor conforme a las Leyes 19.123, 19.992 y 20.874.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

Ha acompañado como antecedente el documento refrendado en el considerando quinto, en la que consta que los demandantes han recibido las prestaciones que se indican, según respuesta de oficio evacuado en el folio 18.

SEPTIMO: Que, en el contexto político vivido a nivel nacional entre los años 1973 y 1990, el artículo 1 de la Ley N°19.123 dispone la creación de la *“Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, servicio público descentralizado, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior. Su domicilio estará en la ciudad de Santiago”*.

Su objeto será la coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por decreto supremo N° 355, de 25 de abril de 1990, y las demás funciones señaladas en la presente ley”.

En ese sentido, una de las finalidades de la aludida Corporación, conforme al numeral 1 del artículo 2 de la citada ley consiste en *“Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley”*, recayendo en las personas consideradas víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En refuerzo de esta normativa, el artículo 1 de la Ley N°19.992, concede una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.

En el mismo orden de cosas, la Ley N°20.874 concede a dichas personas un beneficio económico único, tal como dispone su artículo 1°.

OCTAVO: Respecto de la defensa en estudio, no desconoce este sentenciador los esfuerzos y la implementación de políticas de Estado vigentes hasta hoy en miras a perseguir la reparación del daño causado por agentes de Estado en el contexto del régimen vigente entre 1973 y 1990, recogidos a través de los informes de la Comisión de Prisión Política y Tortura, que refrendan e incorporan a las víctimas de violaciones a los llamados Derechos Humanos, cuya dimensión político-social, precisamente, apuntaba a la reparación y fortalecimiento



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

de las instituciones democráticas y la consolidación de la responsabilidad del Estado frente a estas acciones, lo que también se ha traducido en las diversas persecuciones penales aún vigentes hasta el día de hoy.

En este escenario, es claro que la Ley N°19.123 y las que se han dictado posteriormente han concedido una serie de beneficios, entre ellos los directamente pecuniarios, tanto en materia de salud como otros de carácter simbólico, los que se enmarcan dentro de las finalidades de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, según su artículo 2 antes aludido, destinadas a “promover la reparación moral” de las víctimas.

Sin embargo, el hecho que estas prestaciones se hayan fijado por ley en beneficio de las aludidas víctimas gira en torno al concepto de reparación en todas sus dimensiones y, precisamente, dentro de la finalidad que se anota en el párrafo precedente, esto es, la reparación moral, hecho que no supone impedir el ejercicio de acciones civiles contra el Estado por parte del actor.

No consta que las prestaciones otorgadas supongan una renuncia a la acción civil indemnizatoria que por este acto se entiende, lo que permite colegir, en principio, que la excepción reclamada por la demandada es improcedente.

A mayor abundamiento, las diversas prestaciones reconocidas a nivel legal no apuntan necesariamente a resarcir la dimensión moral del sujeto, sino también el ámbito estrictamente patrimonial y recuperar la pérdida de chances causadas por los actos de agentes estatales (lucro cesante), los que también se ven dirigidos a sus parientes, tales como los referidos al ámbito educacional y en materia de salud.

NOVENO: En definitiva, este sentenciador rechazará la excepción en estudio conforme al razonamiento precedente.

II-En cuanto a la excepción de prescripción extintiva.

DECIMO: De manera subsidiaria a la excepción antes descrita, la parte demandada opuso la de prescripción extintiva de la acción civil, sea en los términos dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, o bien conforme al artículo 2515 del mismo cuerpo legal, en consideración a la data de los hechos que sirven de sustento de la acción en relación con la interposición y posterior notificación de la demanda.

UNDECIMO: En relación con esta materia, la institución de la prescripción, en los términos del artículo 2492 del Código Civil, que precisamente se encuentra



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

destinada a la consolidación de la “seguridad de las posesiones y del crédito”, tal como indica el mensaje de dicho cuerpo normativo.

En relación con esta premisa, el artículo 2493 del mismo cuerpo legal es claro en señalar que *“El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”* y que el artículo 2497 establece que *“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”*.

Respecto a esta materia, conforme a la responsabilidad civil extracontractual que se reclama, el artículo 2332 del Código Civil establece que *“Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto”*.

DUODÈCIMO: Es un hecho de la causa –y que al menos no aparece controvertido por la demandada-, que los actores sufrieron una detención por parte de personal de carabineros, esto es, entre el 5 y el 10 de octubre de 1973, en el contexto político vigente en la época.

Al respecto, es necesario destacar el concepto de delito de lesa humanidad que se encuentra regulado en la Ley N°20.357, que en su artículo 1° indica que *“Constituyen crímenes de lesa humanidad los actos señalados en el presente párrafo, cuando en su comisión concurren las siguientes circunstancias:*

2°. Que el ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos”.

El mismo articulado, luego de referirse a los delitos de lesa humanidad, al genocidio y crímenes de guerra, dispone en el artículo 40 que *“La acción penal y la pena de los delitos previstos en esta ley no prescriben”*.

En relación con lo expuesto, del informe de la Comisión respectiva –y acompañado a los autos-, se describen los delitos cometidos entre 1973 y 1990, los que obedecieron a razones de índole política y que se encuentran vinculados a actos del Estado, en la forma que en dicho documento se consigna latamente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

DECIMOTERCERO: En este análisis, y por aplicación del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política de la República, se desprende que rige, dentro de ese estándar normativo, lo dispuesto en artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el que ha sido ratificado por el Estado Chileno y se encuentra actualmente vigente, que dispone al efecto que *“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización de la parte lesionada”*.

Sobre el particular, y en diversas sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido enfática en establecer, por una parte, que *“que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo”*, mientras que *“la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral”* (Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia “Velásquez Rodríguez vs Honduras”, dictada con fecha 21 de julio de 1989, párrafos 25 y 26. Consultado en <https://summa.cejil.org/es/entity/i0qbrq3n93utmx6r?page=9>; fecha de consulta 28.04.2022)

DECIMOCUARTO: Todo este razonamiento que se viene sosteniendo hasta acá permite llevar a la conclusión que, en primer término, en materia de Derecho Internacional, y reconocido a nivel interno, los llamados delitos de lesa humanidad gozan de la imprescriptibilidad de la acción penal.

En segundo lugar, sobre la base de la vulneración de los derechos que esas acciones lesivas han causado sobre sectores de la población, los estatutos internacionales que han sido ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, conceden un derecho a reparación integral, lo que no sólo permite el derecho al recurso y a la acción judicial, sino al resarcimiento de todo perjuicio patrimonial ocasionado y del que se requiera efectiva reparación.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

En este aspecto, lo refrendado en el considerando anterior deja en evidencia que, frente a las dificultades en la persecución de estos hechos y la satisfacción del derecho a la “reparación integral”, resulta contraproducente entonces aplicar un estatuto de prescripción extintiva a hechos de esta naturaleza, por cuanto se oponen al ordenamiento internacional frente a esta prerrogativa de reparación integral, que resulta predominante por sobre la consolidación de las relaciones jurídicas en base al mero transcurso del tiempo. De lo contrario, se vulneraría precisamente aquel derecho antes citado, por lo que debe necesariamente la acción civil derivada de estos hechos compartir la misma imprescriptibilidad que la acción penal.

No es obstáculo, a juicio de este sentenciador, que los tratados y la normativa internacional aplicadas en esta litis sean posteriores en cuanto a su vigencia al ordenamiento interno, pues los primeros predominan en su aplicación al referirse a derechos inherentes a la naturaleza humana y, por ende, reconocidos dentro del contexto internacional, dado su interés público, los que tiene como base principios de índole superior y que buscan la protección de los derechos más esenciales de cada ser humano.

Además, las normas de prescripción rigen esencialmente para relaciones entre privados y, en el caso de aplicarse en los términos del artículo 2497 del Código Civil, dicen relación con toda cuestión contractual y patrimonial en las que predomina el interés privado en las relaciones con el Estado y sus órganos.

Disponer su aplicación por sobre los tratados internacionales, además, colisiona con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, al prescribir precisamente que *“Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”*.

Este es un tema que, por cierto, ha sido reconocido ya por la Excmá. Corte Suprema en diversas sentencias dictadas por la materia (Rol N°8318-2018; Rol N°29944-2019; Rol N°29.617-2019; Rol N°79.259-2020, entre otras).

DECIMOQUINTO: Por tanto, en relación con la alegación formulada por la demandada en análisis, tanto en su fundamento principal como subsidiario, deberá ser rechazada al estimar que la acción indemnizatoria en este tipo de materias es imprescriptible atendidos los fundamentos esgrimidos precedentemente.

III-En cuanto al fondo:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

DECIMOSEXTO: Que la acción deducida por los actores en el folio 1 de estos antecedentes buscan resarcir el perjuicio moral que le han causado los agentes del Estado, reconocidos en el Informe de la Comisión Valech 1, habiendo sido sujetos a una detención en 1973, sumado a la aplicación de tormentos y tratos vejatorios, reclamando resarcimiento de las consecuencias que de ello derivaron en su esfera personal.

DECIMOSEPTIMO: Que es un hecho de la causa que la parte demandada no ha controvertido la ocurrencia de los hechos denunciados, ni su connotación ni el contexto en que se promovieron aquellos, máxime si han sido considerados los actores conforme al registro del Informe Valech que los sitúa en el listado de víctimas de prisión y tortura, tal como aparece en el documento asociado a dicho informe, en el folio 37, no objetado de contrario.

Sin embargo, la demandada hace presente que el daño moral pretendido a base de esos hechos no se cuantifica a partir de un aspecto económico en particular, por lo que entiende que lo solicitado es excesivo, teniendo en consideración todas las acciones que el Estado ha llevado a cabo a fin de obtener la aludida indemnización y, en subsidio de esa alegación, la regulación debe considerar los pagos ya recibidos y efectuados por el Estado, en armonía con los montos establecidos por los tribunales, los que ha recibido el actor durante años y que seguirá percibiendo con posterioridad.

DECIMOCTAVO: En esta materia, junto con reiterar las normas citadas con anterioridad respecto al derecho de reparación integral que contempla el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 2314 del Código Civil señala que *“El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”*, a lo que el artículo 2329 del mismo cuerpo legal, en su inciso primero, dispone que *“Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”*.

Se ha reconocido que, dentro de la clasificación del daño, atendida su naturaleza, se encuentra el llamado daño moral, que contempla la aflicción, el daño en los sentimientos e integridad espiritual de una persona, que no forman parte del aspecto patrimonial propiamente tal, y que de alguna forma se busca resarcir mediante la indemnización de perjuicios requerida.

Como perjuicio que es, debe ser probado precisamente por quien lo alega, conforme al artículo 1698 del Código Civil.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

DECIMONOVENO: Para su acreditación, los demandantes acompañaron sendos certificados médicos, rolantes al folio 38, además de un certificado psicológico y social del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos CINTRAS, de 4 de septiembre de 2020, en el folio 37. Aparecen descritos en el considerando cuarto precedente.

Respecto de éste último, la parte demandada lo observó al folio 40, haciendo referencias al mérito probatorio del mismo.

Sobre este punto, este sentenciador coincide que el documento no puede ser considerado como informe pericial, pues la prueba tendrá ese carácter siempre que el tribunal la disponga previo decreto judicial. Sin embargo, será apreciado por este juez como prueba instrumental en los términos de lo dispuesto en los artículos 1702, en relación con el artículo 1700, ambos del Código Civil, al tratarse de instrumentos privados emanados de terceros.

Pues bien de esas probanzas, descritas y analizadas latamente en el considerando cuarto precedente, arrojan entre sí un cúmulo de antecedentes que permiten colegir de manera fehaciente por este sentenciador que los actores, al sufrir tratos vejatorios descritos en cada uno de ellos a raíz de la detención sufrida por los demandantes entre el 5 y 10 de octubre de 1973, han padecido un perjuicio emocional que se ha proyectado en sus vidas.

Resulta plausible colegir de los antecedentes acompañados en los folios 37 y 38 que los demandantes experimentaron vivencias que se encuentran fuera del contexto normal, pues padecieron angustias, temor y sufrimiento a causa de la detención y el contexto en que se describe; sin mediar una orden judicial y sometidos a tratos fuera de los límites soportables para un ser humano, tales como fusilamientos, amenazas, trabajos forzados bajo situaciones de cansancio físico y permanecer recluido en condiciones insalubres, hechos que provocaron una impresión fuerte que los documentos antes señalados refieren que permanecen hasta el día de hoy, pese a haber transcurrido ya casi cinco décadas desde su ocurrencia.

VIGESIMO: Así las cosas, este sentenciador estima, de acuerdo a lo señalado en el considerando anterior, que los actores han acreditado que las detenciones sufridas por éstos en 1973, le ocasionaron perjuicio moral pues afectó su dimensión espiritual.

Si bien es dable presumir que una consecuencia lógica de una experiencia traumática como la que los demandantes han explicado en su demanda consiste



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

precisamente en un daño moral de tal entidad que provocó de manera indiscutible un cambio en el desarrollo personal y que permanece en su espiritualidad hasta el día de hoy, como todo perjuicio se requiere prueba para sostener, con precisión, la forma en que ese daño moral no solamente existe, sino que también cómo se ha manifestado o repercutido en el afectado, esto es, su intensidad, de tal manera que ello influirá en el quantum indemnizatorio a fijar.

En este acápite del razonamiento sobre el daño causado, es importante precisar que los antecedentes acompañados con la presentación folio 38 junto con la del folio 37, son idóneos para pronunciarse sobre la existencia del daño y el quantum indemnizatorio por el que se debería acoger la acción deducida, pues refiere a efectos en un contexto particular, donde especialmente los certificados médicos del folio 38, sin objetar, precisan los daños recaídos en la persona de cada uno de los actores, pues las secuelas varían de persona en persona, sin perjuicio de existir ciertos patrones comunes a causa de estos hechos.

En ese sentido, el certificado del folio 38 respecto de Julio Contreras Leiva, detalla las vejaciones por las que tuvo que pasar en su periodo de detención y las secuelas posteriores. Si bien expresa que el aludido actor pudo rehacer una vida y dedicarse a labores remuneradas entre 1977 y 2017, además de formar un grupo familiar y tener tres hijos, resulta evidente que la situación vivida le produjo un menoscabo moral.

En efecto, en dicho antecedente se consigna que existe un impacto negativo e irreparable en su historia vital producto de lo acontecido durante la detención, además de daños en el proyecto de vida, educacional, y económico, percepción de carencia, producto de estrés postraumático crónico. Manifiesta capacidad de resiliencia, logrando reconstruir su vida y mantener a su familia pese a las innegables secuelas psicológicas que experimenta hasta la actualidad.

En un antecedente similar acompañado en el folio 38, no objetado de contrario, respecto de Fernando Contreras Leiva, se detalla que se vio afectado no sólo emocionalmente sino que impactó en su proyecto de vida, pues la detención causó un aislamiento y falta de sociabilización del actor, sin tener pareja estable, además de un perjuicio económico al encontrarse, en ese entonces, haciéndose cargo de ganado en el lugar donde ocurrieron los hechos, cuyo descuido a causa de la detención sufrida le generaron un grave perjuicio en ese aspecto.

El mismo informe colige que Concluye “un impacto irreparable en su historia vital, causando deterioro en su vida, sin poder concretar relaciones de pareja;



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

pérdida de fuente laboral y aislamiento, junto con el rechazo por relacionarse por la sociedad civil y carabineros”, atendida la situación experimentada por el actor.

Dichos antecedentes señalados precedentemente y latamente analizados en el considerando cuarto de esta sentencia, permiten dar un parámetro a este sentenciador dentro del cual determinar el monto indemnizatorio a conceder a los actores, que de suyo es complejo al valorizar y poder reflejar la intensidad del padecimiento sufrido por los demandantes frente a los hechos ilícitos ocurridos en el contexto de actuaciones de agentes estatales ocurrido en 1973.

VIGÉSIMO PRIMERO: De acuerdo al razonamiento anterior, este sentenciador estima, dada la magnitud de los hechos sufridos por el actor Julio César Contreras Leiva y las secuelas adquiridas a consecuencia del ilícito cometido en su contra, pese a que pudo rehacer su proyecto de vida en el ámbito laboral y familiar, deberá regularse el daño moral acreditado en una suma de \$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos), por lo que no se accederá a la petición en la forma solicitada en la demanda respecto al monto solicitado considerando la ponderación prudencial que este sentenciador realiza tomando en cuenta la situación personal de dicho actor a base de los antecedentes proporcionados.

En cuanto al actor Fernando Enrique Contreras Leiva, aparece de los antecedentes ya refrendados que el daño causado es de intensidad mayor, tomando en cuenta las secuelas inmediatas sufridas por éste, en torno a la actividad ganadera que realizaba a la época de los hechos, sumado a la imposibilidad de concretar un proyecto de vida estable y de sus problemas de sociabilización que dejan en evidencia sus antecedentes médicos, lo que permite ponderar a este sentenciador dicho perjuicio moral en la suma de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos).-

VIGÉSIMO SEGUNDO: Respecto a la alegación de la demandada a fin de considerar los beneficios que los actores actualmente reciben y que fueron acreditados en autos en el folio 18 para los efectos de fijar la indemnización que se concede, se rechazará por los mismos motivos consignados al desechar la excepción de reparación integral, en circunstancias que su argumento plantea, en cierto modo, el mismo efecto que se tuvo en consideración al esgrimir que la parte demandante habría sido resarcida de los perjuicios sufridos con las prestaciones legales concedidas en su favor y que actualmente percibe.

VIGÉSIMO TERCERO: En cuanto al reajuste e interés solicitado, será acogido sólo en cuanto se concederá el aludido reajuste de la suma fijada a título



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

de indemnización conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior a aquel en que quede ejecutoriada esta sentencia hasta el mes anterior al del pago efectivo y, a su vez, generará intereses corrientes, todo ello contado desde que esta sentencia se encuentre ejecutoriada hasta su pago efectivo.

VIGÉSIMO CUARTO: En cuanto a la condena en costas solicitada, no se accederá a la imposición de dicha carga procesal en circunstancias que la demandada no fue totalmente vencida y que, en todo caso, estima que ha litigado con fundamento plausible en el proceso.

VIGESIMO QUINTO: Finalmente, el resto de la prueba acompañada al proceso por los actores en los folios 36 y 37 que no fueron analizados mayormente en el considerando cuarto de este fallo, no gozan del mérito suficiente como para alterar lo resuelto precedentemente, al tratarse de aspectos genéricos que permiten contextualizar los efectos ocasionados en las personas que sufrieron tratos vejatorios, detenciones ilegales y torturas entre 1973 y 1990, por lo que no precisan los perjuicios específicos sufridos por los actores que sí pudieron sostenerse conforme a los documentos acompañados en los folios 37 y 38 descritos anteriormente.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 1698, 2314, 2329, 2332 y 2514, todos ellos del Código Civil, 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 27 de la Convención de Ginebra sobre Derecho de Los Tratados y 170 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I-**Se rechaza** la excepción de reparación integral alegada por la demandada.

II-**Se rechaza** la excepción de prescripción extintiva conforme a los fundamentos contenidos en los considerandos décimo a decimocuarto de esta sentencia.

III-**Se acoge** la demanda interpuesta en el folio 1 de estos antecedentes, sólo en cuanto condena a la parte demandada al pago de una suma de **\$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos)** a título de daño moral en favor del actor Julio César Contreras Leiva y la suma de **\$50.000.000.-(cincuenta millones de pesos)** bajo el mismo título indemnizatorio en favor del actor Fernando Enrique Contreras Leiva.

Dichas sumas deberán pagarse debidamente reajustadas y con los intereses respectivos de acuerdo a lo señalado en el considerando vigésimo tercero de esta sentencia.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK

«RIT»

Foja: 1

IV-**Que no se condena** en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida y por haber litigado con motivo plausible.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Dictada por don Gastón Villagra Santander, juez titular del Décimo Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veinte de Septiembre de dos mil veintidós**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSKXXBXXFLK